



Documentos de coyuntura del Área de Política (IDH-UNGS)

IDH | Instituto del Desarrollo Humano - Área Política

Documento

02

**Crisis coyuntural: entre la
profundización y el retroceso**

Ricardo Aronskind

Documentos de coyuntura del Área de Política (IDH-UNGS)

Documento
02 | Crisis coyuntural:
entre la profundización y el retroceso

La herencia.....	2
La política económica del kirchnerismo	2
Los problemas estructurales no resueltos	4
El kirchnerismo y la burguesía nacional.....	5
Las cuestiones que convergieron en la coyuntura	6
La lucha política implícita en la interpretación de la coyuntura	7
La reacción empresaria frente a las dificultades.....	8
Las medidas del gobierno	9
Grieta, los buitres y más allá	9
Tres escenarios para los próximos meses.....	9
El documento de la Convergencia Empresaria	10
La mirada en el 2015.....	11

Documentos de coyuntura del Área de Política (IDH-UNGS)

Documento

02

Crisis coyuntural: entre la profundización y el retroceso

Ricardo Aronskind

La herencia

Dos planos deben abordarse para comprender la herencia recibida por el kirchnerismo: el local y el global. El local, signado por una catástrofe social, y una estructura productiva afectada por la desindustrialización, la extranjerización y el endeudamiento.

En el plano internacional, el predominio material e ideológico del capitalismo financiero, y la subordinación creciente de la mayor parte de los sistemas políticos a las demandas de bancos y multinacionales.

Adicionalmente, en el terreno político local, buena parte de la población no logró visualizar las causas del desastre económico y social ocurrido en 2001, lo que limitó la posibilidad de sacar lecciones políticas relevantes en cuanto a una condena social sólida del neoliberalismo.

Socialmente, se había verificado una profundización de la fragmentación social y la consiguiente atomización de los actores colectivos. La ruptura del lazo social se expresaba en la ausencia de un horizonte compartido por los habitantes del país.

En las relaciones económicas externas, quedaban un conjunto de conflictos irresueltos con el sistema financiero mundial: deuda con el Club de París, enorme deuda externa con acreedores privados y organismos internacionales, compromisos insostenibles con las empresas privatizadas o concesionadas.

Es en este contexto que abordamos las orientaciones político-económicas del movimiento político que gobierna el país desde 2003, así como las dificultades y límites de su accionar, en relación conflictiva con actores político-económicos nacionales e internacionales.

La política económica del kirchnerismo

Sintéticamente, se puede ver a la política económica kirchnerista como un proceso de clara inspiración keynesiana, que dio un fuerte impulso tanto a la recomposición de los ingresos de los sectores más castigados de la población como a la obra pública como motor de tracción del sector privado. La recuperación de la capacidad de consumo de amplios sectores fue visto por el gobierno como la llave para la expansión productiva y las mejoras distributivas.

Uno de los aspectos distintivos de la primera etapa de gobierno fue la autonomía relativa del Estado nacional en relación a los sectores privados, tanto locales como extranjeros. El pago completo de la deuda

al FMI, en 2005, sacó de la escena local a un actor con vasta influencia política y económica en el período anterior. Esa autonomía, en principio financiera y política, luego reforzada por diversas estatizaciones, colocaba a la gestión nacional por afuera del “libreto” de la globalización neoliberal vigente.

Este elemento generó constantes rispideces con el empresariado local más concentrado y los medios de comunicación afines a ellos, habituados a una relación de primacía sobre el poder político. En ese primer período de gobierno, el crecimiento fue compartido por prácticamente toda la sociedad, lo que permitió distender el clima social, sin apelar a cambios estructurales significativos. El contexto económico internacional, de buenos precios para las exportaciones de materias primas y bajas tasas de interés, contribuyó a consolidar la situación. Kirchner utilizó esa coyuntura para fortalecer las reservas del Banco Central (otro reaseguro contra las presiones de los sectores económicos internos) y desendeudar al país. Fue un período donde ganaron todos, los trabajadores, los desocupados, los empresarios industriales y agrarios, los bancos.

Apenas iniciado el segundo tramo kirchnerista, encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, ocurrieron dos episodios gravísimos. A poco de iniciada la gestión, el gobierno nacional recibió el ataque violento de las corporaciones agropecuarias, en defensa de su “derecho” a apropiarse de la abultada renta diferencial internacional que recibía el agro. La coalición social cuyo eje era el complejo sojero pudo derrotar discursivamente y en las calles al kirchnerismo, imponiéndole un límite político. En la segunda parte del año, estalló una grave crisis financiera internacional, con epicentro en Estados Unidos y Europa. El resto de la gestión estuvo marcado por los efectos de ambas situaciones negativas. Por una parte, no se podría actuar para modificar la composición de la producción agraria, ni aislar parcialmente el mercado interno de la inflación internacional. Por otra parte, comenzaría una fuerte fuga de capitales –como en el resto de la región– y el Estado debió utilizar sus recursos para inyectar impulso ascendente a una situación económica que amenazaba con hundirse, debido a la reacción defensiva del sector privado. El gobierno fue exitoso en contener las tendencias recesivas y volver a expandir la actividad económica. En plena crisis global, se estatizó el sistema de jubilaciones y pensiones, uno de los grandes negocios rentísticos de los ’90, provocando un cambio estructural al fortalecer fuertemente los ingresos estatales y su autonomía en relación a los prestamistas privados. Además, permitió el lanzamiento de un eficaz instrumento de reparación social, la Asignación Universal por Hijo. En el último tramo de esa segunda gestión, ante crecientes presiones inflacionarias, el gobierno utilizó un cierto retraso cambiario para moderar las expectativas, lo que luego se revelaría como un error. Los instrumentos que se usaron para frenar el alza de precios fueron precarios, y el fenómeno no fue interpretado como potencialmente peligroso por las autoridades económicas. La recuperación de la economía y de la iniciativa política –expresada en varias leyes progresistas– abrió paso a la reelección de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El tercer mandato kirchnerista arrancó con la convicción, expresada por la presidente, de que había que hacer cambios en ciertas políticas del sector público, agrupados bajo el nombre de “sintonía fina”. Había una percepción de que ciertos aspectos de la gestión económica debían ser revisados, como por ejemplo el amplio sistema de subsidios a la energía, servicios públicos y transporte.

Era evidente que el Estado tenía que hacer políticas más direccionadas, superada la etapa de la emergencia por la crisis de 2001-2002. Precisar qué sectores debían ser apoyados y cuales no. También en el frente externo se observaban problemas, ya que la abundancia de divisas que caracterizó los primeros años kirchneristas estaba menguando. Las presiones inflacionarias, luego de las mejoras distributivas de los años previos y de la reducción del desempleo, comenzaban a acentuarse.

Los problemas estructurales no resueltos

El kirchnerismo tendió a hacer políticas progresistas sobre una estructura económica y social que tomó forma bajo el influjo de políticas neoliberales extremas. Ese esquema de funcionamiento empezó a mostrar sus limitaciones. La convivencia “armónica” con la herencia de las privatizaciones, tanto en los servicios públicos como en el sector energético, se mostró crecientemente dificultosa. La crisis del transporte ferroviario expresó crudamente la divergencia entre un discurso afirmador de lo público y lo popular y un servicio ofrecido bajo los más estrictos cánones del neoliberalismo. La gestión de la multinacional española REPSOL, asociada

luego al grupo local Petersen, fue otra manifestación de la lógica rentística del neoliberalismo noventista, cristalizado en un conjunto de organismos e instituciones que seguían intactos. La gestión de las divisas producto de comercio exterior había sido fuertemente privatizada en los '90, incluyendo no sólo la eliminación de la Junta Nacional de Granos, sino el libre movimiento de excedentes financieros, la privatización de puertos y la supresión de otros instrumentos de control público. La concentración del comercio interno en poderosas cadenas supermercadistas también implicaba un poder de mercado que se reflejaba en altísimos precios pagados por los consumidores, a costa también de los productores. El gobierno pareció comprender los severos límites del “mercado” para solucionar los problemas de la sociedad cuando lanzó la Asignación Universal por Hijo, que expresaba la admisión de que el fuerte crecimiento económico no había logrado sacar de la indigencia a significativas franjas poblacionales.

El kirchnerismo y la burguesía nacional

Puede ayudar a pensar algunas limitaciones y problemas que ha presentado la política económica kirchnerista ponerla en relación con el objetivo explícito de promover una “burguesía nacional”. Como toda alianza social, apoyarse en (y apoyar a) un determinado sector tendría un conjunto de beneficios (“el desarrollo nacional”, “la industrialización”) y también costos en términos de la calidad y eficacia de las políticas públicas.

Durante toda la gestión kirchnerista, el Estado nacional ha promovido, subvencionado y protegido en forma amplia al sector industrial local. El apoyo ha sido masivo y ha implicado un fuerte gasto público, además de choques comerciales con aliados de MERCOSUR, para proteger un mercado interno expandido por la acción pública. Pero a pesar del notable crecimiento industrial y también del crecimiento exportador/industrial, las características heredadas de la industria argentina, en muchos casos, no cambiaron. No mejoró significativamente su competitividad internacional ni el perfil de la inserción internacional del país. La introducción del grupo local Petersen en la conducción de YPF Repsol tampoco cambió la dinámica rentista de la empresa. Los concesionarios de servicios públicos tampoco mostraron que su continuidad sirviera para mejorar la vida de los ciudadanos. No surgieron nuevos actores dinámicos con presencia significativa en el viejo entramado industrial.

En el terreno político no se registró, en todo el período kirchnerista, un apoyo firme y sin ambigüedades desde el sector industrial al gobierno, ni siquiera cuando peligró su estabilidad por el embate del sector agrario. En 2009, el Estado nacional debió realizar una política muy activa y costosa para frenar la ola de despidos que el sector industrial se aprestaba a realizar. Esa actitud empresaria, basada más en expectativas que en hechos concretos, tendría efectos recesivos sobre el propio mercado interno, que el Estado debió compensar con mayor gasto público. Nuevamente, en la crisis devaluatoria reciente, el comportamiento masivo del sector industrial no reflejó ningún tipo de compromiso con el Estado ni con el mercado interno en el que opera, al incrementar desproporcionadamente los precios y golpear al salario real de los trabajadores. La eventual contracción de la actividad económica, y de la demanda interna, guardaría estrecha relación con el modo en que la “burguesía nacional” ha reaccionado frente a las recientes dificultades económicas.

Un balance provisorio, indicaría que el tipo de relación establecida entre el Estado y el empresariado debe ser revisada. No para renunciar a promover la industrialización, sino para buscar caminos más efectivos hacia una reconversión productiva y tecnológica, y no simplemente un crecimiento de baja calidad, que eterniza las ayudas y protecciones públicas. La revisión del sistema de premios y castigos establecido por el Estado debería llevar a la propia revisión de las capacidades estatales para establecer y administrar políticas inteligentes y efectivas en el terreno productivo.

Las cuestiones que convergieron en la coyuntura

Durante 2013, el dato económico novedoso, que se transformó en clave interpretativa del cuadro de situación, fue la caída de las reservas del Banco Central (de 43.000 a 30.000 millones de dólares, a lo largo del año). En los últimos 3 años –mayo 2011/mayo 2014–, las reservas se redujeron a la mitad. En Argentina el nivel de las reservas del BCRA tiene resonancias particulares, en virtud del final dramático de la gestión alfonsinista, que tuvo que ver con una evaporación de esas reservas, un salto devaluatorio gigante, y detrás de eso, un alza de precios desmesurada –la hiperinflación de 1989– que derivó en la caída del primer gobierno democrático

Numerosas razones confluyeron para que se produjera la reciente caída de las reservas. En principio, varios factores son problemas heredados de las gestiones neoliberales.

- El Estado nacional continuó afrontando todos los compromisos heredados vinculados a los pagos de la deuda externa, que si bien atenuados, significaron una merma constante de las reservas. Junto con esto, al no haberse normalizado una serie de contenciosos con la “comunidad financiera internacional”, el país no tuvo acceso al crédito internacional a tasa “normal” (muy baja) a pesar que los indicadores externos argentinos eran notablemente buenos.
- La extranjerización de la economía argentina en los '90 creó un piso muy alto de fondos que se giran anualmente en concepto de utilidades, pagos de servicios, compras inter-firma, por parte de las firmas multinacionales que operan en el país. Cuanto mayor el crecimiento y las ganancias, más fondos se giran al exterior. El Estado no creó mecanismos eficaces de control de estas transferencias externas.
- La gestión rentística de la principal empresa del país (YPF) por parte de la multinacional española REPSOL –y el grupo local Petersen– llevó a que se privilegiara la repartición de utilidades y su remisión al exterior, sobre los planes de incremento de la producción. El resultado fue la reversión del saldo comercial externo favorable que tenía la actividad hidrocarburífera, creando una fuente adicional de egresos de divisas.

Sobre este cuadro, se agregó el impacto de la crisis internacional de 2008:

- A partir de esta crisis se generó una fuerte fuga de capitales desde toda la periferia hacia los países centrales. No sólo se trató de capital financiero perteneciente a sectores locales o globales, sino que las firmas multinacionales remitieron hacia el exterior ingentes sumas de dinero para consolidar la estabilidad financiera de sus casas matrices.

Al mismo tiempo, se agregan los efectos contradictorios de ciertas políticas implementadas por el kirchnerismo:

- El fuerte crecimiento industrial, combinado con la escasa sustitución de importaciones, permiten entender el incremento del importante déficit de divisas en el sector industrial, con epicentro en el sector automotriz y en las armaduras de bienes electrónicos de Tierra del Fuego. Las políticas sustitutivas implementadas parecen haber generado pocos resultados concretos.
- Las crecientes presiones inflacionarias a partir de 2008, producto de los aumentos de precios internacionales y la puja distributiva local, no fueron adecuadamente administradas. El gobierno optó, durante 2011, por utilizar el tipo de cambio como “moderador de expectativas”, generando cierto grado de atraso cambiario.
- Esta situación derivó en percepciones sociales sobre la “baratura” relativa del dólar, lo que estimuló en los últimos años un significativo incremento del turismo en el exterior, con la consiguiente salida de divisas.

- El gobierno estableció a fines de 2011 restricciones para la venta de dólares para “atesoramiento” (fuga), y crecientes regulaciones a las importaciones. El impacto de estas medidas fue positivo en cuanto a frenar la salida masiva de dólares por parte de grandes corporaciones y sectores de altos ingresos, pero dio pie a la construcción mediática del dólar “blue”: un artefacto político-cultural. El dólar “blue” se constituyó en una formidable victoria política de los sectores financieros más especulativos y parasitarios, que lograron instalarlo como un indicador “serio” de la realidad económica, una suerte de “verdad” ocultada por el poder kirchnerista, pero revelada desde las “cuevas” del microcentro porteño. El “blue” permitió liderar las expectativas cambiarias y devaluatorias, provocar la dolarización de los ahorros de vastos sectores privados, retrasar especulativamente las ventas de granos para exportación, estimular el adelanto de importaciones de todo tipo de bienes y promover las remarcaciones “precautorias” por parte de los más diversos actores empresariales. Fue la reintroducción de prácticas que buscan alta rentabilidad financiera de corto plazo, adormecidas durante un período largo de serenidad en el frente externo.
- El lanzamiento de restricciones a la compra de dólares no fue acompañada por la oferta de formas alternativas de ahorro para los pequeños ahorristas, lo que reforzó la demanda de dólares “marginales” y la credibilidad de indicadores lanzados desde el sector financiero con fines especulativos.
- El período 2012-2013 se caracterizó por cierto grado de descoordinación de políticas dentro del propio gobierno. Apareció una conducción económica dividida en varias áreas del Estado, que a veces carecía de una lógica de conjunto o una adecuada secuenciación de las medidas.

A estos factores, debe agregarse la actividad conciente de actores económicos concentrados, y de gran influencia ideológica sobre los sectores medios.

- La acción activa y voluntaria de grupos empresariales, incrementando artificialmente la demanda de dólares, contrayendo artificialmente la oferta y promoviendo expectativas sociales catastrofistas. Se combinan la búsqueda de rentabilidades extraordinarias de corto plazo, producto de expectativas en la devaluación repentina de la moneda, con intenciones políticas de acelerar la finalización del presente ciclo kirchnerista.

La lucha política implícita en la interpretación de la coyuntura

La ciudadanía en general no dispone de criterios propios para entender los mecanismos específicamente económicos que operan en la coyuntura. Los criterios se los suministran los medios de comunicación. Se observó mucho desconcierto y dificultad para entender lo que sucedió en el convulsionado terreno económico desde noviembre/diciembre de 2013. Existe una disputa ideológica-cultural profunda entre los defensores de los principales lineamientos gubernamentales y sectores de la derecha económica, social y cultural. La gran pelea es sobre la interpretación de todo lo que está pasando, también en el terreno de la economía. Algunos pretenden interpretarlo como una especie de catástrofe final de un modelo que inevitablemente debía terminar de esa forma. Para la derecha neoliberal, el resultado estaba establecido desde el principio: no hay posibilidad alguna, en una economía periférica, de hacer otra cosa que ajustes, aperturas y endeudamientos. Eso es lo normal. La “anormalidad” de implementar políticas heterodoxas puede durar un tiempo, pero luego se derrumba por haber ignorado la “realidad económica” de las reglas fijadas por “el mercado”.

Por otra parte, en los análisis económicos se omite sistemáticamente la situación internacional, cuando antes el principal argumento para desmerecer la gestión gubernamental era el “viento de cola” externo. Se pretende ocultar, por ejemplo, la caída tendencial del crecimiento global debido a una crisis mundial aún irresuelta, o el ínfimo crecimiento de nuestro principal socio comercial, Brasil, debido a la continuidad de

políticas monetarias ortodoxas. A este cuadro externo se suma el cambio en la política monetaria norteamericana, que está acelerando la fuga de capitales de América Latina y promoviendo devaluaciones en toda la periferia. Las tendencias contractivas en la región afectan especialmente a Argentina.

Muy importante también es el debate sobre las causas de la inflación. Además del viejo desacuerdo académico sobre si el factor principal es la expansión monetaria, el gasto público, la puja distributiva o las estructuras oligopólicas de la economía, en el terreno político la pregunta es quien tiene la culpa del fenómeno. Para la oposición política el planteo es sencillo y rentable: la culpa la tiene el gobierno. Para el kirchnerismo, el tema es más complejo, porque tiene que situar la explicación en el plano del comportamiento de los actores económicos privados –algunos de los cuales ha promovido y estimulado para construir una nueva “burguesía nacional”–, que están permanentemente invisibilizados por la ideología predominante en la sociedad.

Otra visión alternativa sobre la crisis coyuntural sostiene que, en realidad, se están presentando dificultades y problemas que en un país menos conflictivo serían absolutamente manejables. Simplemente se trataría de aprender de las equivocaciones y corregir el rumbo, sin grandes sobresaltos, dado que se ha ido construyendo en un terreno mucho más sólido que el del volátil noventismo neoliberal. El problema central sería que el poder económico más concentrado –y su correlato político y mediático– no acepta, ni aceptó desde el comienzo, el fenómeno político kirchnerista. Ni aceptará, en un sentido aún más amplio, cualquier gobierno nacional autónomo en el que los sectores subalternos tengan presencia e influencia. Y a medida que este experimento permaneció y se desarrolló, mayor ha sido la resistencia y la determinación de derrotar al gobierno. Así, muchos de los problemas habituales para cualquier economía (impacto de la crisis global, dificultades de gestión, errores y correcciones) son aquí transformados en herramientas de desgaste y presión. Los problemas acumulados en el último período han sido visualizados como una nueva oportunidad para atacar y debilitar al actual gobierno. La apuesta al fracaso kirchnerista encuentra a estos intereses no como meros impugnadores externos, sino como protagonistas centrales de las jugadas económicas dirigidas a agravar la crisis y eventualmente llevarla hacia una explosión. Se trata, con todas las letras, de una política de boicot interno a través de la economía. Y no importa que eso implique el sufrimiento de la mayoría de los argentinos.

La reacción empresaria frente a las dificultades

El comportamiento del empresariado realmente existente frente a los problemas de la coyuntura, en todas sus variantes, sólo contribuyó a profundizar los problemas.

En la mayoría de los casos, adoptó un comportamiento técnicamente denominado “de manada”, caracterizado por actitudes de seguidismo de rumores y de emulación de comportamientos de otros actores más grandes, a quienes reconocen un liderazgo social. Un sector importante del empresariado se encuentra bajo el liderazgo ideológico del “blue”, o sea del rentismo financiero. También en este plano se pueden incluir las “remarcaciones defensivas”, es decir, acciones pro-inflacionarias motorizadas por miedos, rumores o lo que “dicen los diarios”, el adelanto de importaciones, la demora en liquidar exportaciones y otros artilugios especulativos.

Pero en el nivel más alto de la dirigencia no hay inocencia, ni prácticas simplemente de salvación individual. Hay estrategia y conducción, aprovechando el espontáneo ejército de actores económicos que orbitan bajo la influencia ideológica de los *mass media*. Es, por ejemplo, el caso de Shell, operando para hacer saltar el dólar oficial, aunque esa operación transitoriamente le generara pérdidas, o las multinacionales aplicando instantáneamente despidos y suspensiones. Las campañas de rumores, de análisis apocalípticos, no tienen nada de espontáneo ni de ingenuo. Son parte de una disputa estratégica por la conquista del poder político por parte de las grandes corporaciones.

Las medidas del gobierno

Seguramente el gobierno decidió no permitir que las presiones cambiarias siguieran acumulándose, previniendo un estallido devaluatorio cada vez mayor. La devaluación de enero permitió fijar el tipo de cambio oficial en un nivel más defendible, achicar la brecha con las diversas cotizaciones marginales, y cortar con la expectativa de una megadevaluación. El BCRA, mostrando las posibilidades que tendría una política más atenta de parte de las autoridades monetarias, obligó a las entidades bancarias privadas a vender posiciones en dólares que habían acumulado en meses previos (los bancos ganaron, gracias a la devaluación, 10.000 millones de pesos en enero). Por otra parte, revirtiendo una política de los años previos, se incrementó fuertemente la tasa de interés, para generar un estímulo que redireccionó parte de los fondos líquidos hacia los depósitos en moneda local y otros activos en pesos. Se frenó así la presión cambiaria, con el costo de enfriar la economía transitoriamente, hasta que se descomprima el frente externo.

Al mismo tiempo, el gobierno acentuó una tendencia que ya había insinuado durante 2013: la agilización de las negociaciones externas con diversos acreedores financieros para reabrir fuentes de crédito internacional hacia nuestro país. El gobierno, obligado por la presión cambiaria de actores locales, tuvo que salir a cerrar conflictos externos a gran velocidad. El conflicto con los fondos buitres y la justicia norteamericana son el último gran tema pendiente con las finanzas occidentales. Si se resuelve ese frente, quitará margen a los desestabilizadores locales, al quebrar las expectativas de iliquidez cambiaria.

En general, no está suficientemente visibilizado por la sociedad que el país se encuentra atezado entre los especuladores locales y los acreedores internacionales, y que de la resolución de esta doble presión depende el bienestar de la población.

Griesa, los buitres y más allá

En el panorama arriba descrito, el insólito fallo del juez Griesa a favor de los fondos buitres y el aval indirecto de la Corte Suprema de Estados Unidos a dicha sentencia, agregó nuevos elementos de incertidumbre a la situación imperante. En un cuadro económico marcado por una moderada recesión, el fallo podría generar una acentuación de la contracción generada a partir de expectativas tanto reales como ficticias. Si se dieran todas las peores opciones que se abrieron a partir de los actos del juez norteamericano, se recrearía un clima propicio a la especulación cambiaria y a las remarcaciones inflacionarias. La situación es volátil, pero parece haber diversos actores privados externos –de mucho peso para el empresariado local– apostando a que la situación se resolverá sin traumas severos. Si finalmente se encontrara una vía de salida al conflicto con los buitres –y se desmontaran las amenazas sobre las reservas y sobre la deuda pública–, el 2015 parecería despejado no sólo de la tenaza financiera externa, sino que por añadidura se aflojarían las apuestas devaluatorias locales, ya que desaparecería el potencial impedimento a recurrir al crédito externo de fuentes occidentales.

Tres escenarios para los próximos meses

Esta conceptualización es necesariamente esquemática. Pretende señalar variantes posibles de la dinámica económico-política vigentes en agosto de 2014.

Caotización: se profundiza el desorden económico, y se aceleran los saltos de precios y la conflictividad social; el gobierno no logra controlar la situación y el embate político de diversos actores coordinados (externos e internos) lleva a un escenario de crisis institucional.

Se buscaría que en 2015 el Estado esté “a tiro de corrida cambiaria”, con reservas muy menguadas, como para provocar un golpe hiperinflacionario usando nuevamente la suba del dólar marginal u obligar a un hiperrecesión, con un salto grave en el desempleo. Los fuertes vencimientos de deuda externa del próximo año, si no son refinanciados, pueden contribuir a esa situación de debilitamiento de reservas.

La ventaja que un escenario así tiene para los actores más retrógrados –y los que necesitan mayor impunidad– es que abre el camino para una fuerte regresión en todos los planos, con la excusa de “controlar el caos dejado por el kirchnerismo”.

Es interesante señalar que la radicalización discursiva en el terreno político, escenificada en manifestaciones como los cacerolazos de 2012 y 2013, con marcada proyección destituyente, no fue acompañada de una radicalización paralela del discurso económico. Aun no se dieron las condiciones para que la oposición de derecha se atreva a plantear abiertamente el escenario de remoción del “modelo” kirchnerista (aún cuando todos los elementos dispersos de una “restauración noventista” se encuentran presentes en los discursos de los voceros neoliberales).

Desgaste: en este escenario, el gobierno queda atrapado en una dinámica de muy bajo crecimiento, o de estancamiento económico, que sería agravada por el comportamiento empresario y del sindicalismo opositor, para llegar en un clima de malestar y falta de expectativas favorables a las elecciones. Sería interpretado como “inevitable fin de ciclo” tantas veces anunciado. El cuadro no destruiría al kirchnerismo como fuerza política, pero lo debilitaría y favorecería su desgranamiento, y permitiendo el triunfo de opciones conservadoras internas o externas, sin espíritu de cambio y tributarias del quietismo social y económico. Un gobierno de esas características no tendría voluntad de cambio, pero carecería también del vigor para producir una regresión económica y social en toda la línea, como pretenden sectores del establishment.

Relanzamiento: el gobierno logra romper el círculo de retroalimentación “expectativas devaluatorias-remarcaciones compulsivas-demandas salariales”, desarmando las maniobras cambiarias, ganando control sobre el sector externo, profundizando el vínculo directo entre productores y consumidores, y redoblando el esfuerzo explicativo sobre la situación económica y las medidas que se toman para resolverla.

Si el gobierno logra poner la situación económica bajo control, desarticulando la trampa “o recesión o corrida”, puede avanzar en el año 2015 con nuevas medidas progresistas que permitan llegar en condiciones auspiciosas a las elecciones de ese año.

El documento de la Convergencia Empresaria

Un documento clave para entender la dinámica actual es el que ha emitido la Convergencia Empresaria. El nucleamiento presenta como un programa a ejecutar en el nuevo tramo institucional que se abre a partir de 2015 un acumulado de demandas empresarias para incrementar fuertemente su rentabilidad a costa de los ingresos del Estado y de amplias franjas de la población. Buena parte del espectro político parece, de acuerdo a las declaraciones realizadas, moverse en esa dirección ideológica. Por ejemplo, en torno a la voluntad de reducir las retenciones agropecuarias, “vincularse al mundo” o crear buen “clima de negocios”. El documento, explícitamente, señala que ese programa económico puede ser ejecutado “por cualquier partido político”. La acotación parece sugerir que no solamente Macri, quien acuerda plenamente con los lineamientos neoliberales del documento, o los principales candidatos de FA-UNEN que también lo sugieren, sino eventualmente alguien surgido del propio oficialismo actual (¿Scioli?), podrían adoptar los principios económicos de la Convergencia Empresaria. Vale la pena recordar que en 1989, el programa neoliberal no sólo tenía su portaestandarte partidario natural (la UCeDé), sino que también había sido adoptado por el candidato oficial de la UCR (Angeloz), y finalmente fue ejecutado por el candidato “alternativo” (Menem, PJ). La tradicional carencia de un programa explícito por parte del kirchnerismo hace difusa una confrontación explícita en el campo de las propuestas.

La mirada en el 2015

De numerosas declaraciones y artículos publicados en la prensa conservadora surge la idea de una apuesta fuerte a *reconducir* la economía argentina a una especie de “normalidad” internacional, donde básicamente el argumento es que el Estado debe estar al servicio de “los mercados”, eufemismo para aludir a los sectores de capital más concentrados. Recientemente el economista González Fraga (FA-UNEN) ha señalado que, dado el bajo nivel de la deuda externa argentina actual, con el gobierno que asuma en 2015 el país podría ampliar su deuda en dólares del actual 10% del PBI, al 30% del mismo. Lo notable es que ese potencial incremento de deuda de cerca de 80.000 millones de dólares sería utilizado para reducir los impuestos “al campo” y el IVA. No para cambiar la matriz productiva argentina, ni para volver más inteligente y eficiente el Estado, sino para reducir impuestos a sectores de altísimos ingresos y convalidar en parte la incapacidad pública para reducir la evasión en otros impuestos.

Es evidente que la propuesta de reendeudamiento, que empieza a ser explicitada en los medios opositores, suena positivamente en los oídos de la “comunidad financiera internacional”, presta a dar la bienvenida a un gobierno “normal”.

Desde una perspectiva regional, la reinstalación del neoliberalismo en la conducción económica argentina sería un factor que debilitaría el proyecto de integración regional autónoma, ya que nuestro país ha sido en la pasada década un actor muy decidido de ese proceso, frente a posturas menos claras de Brasil, Uruguay y Paraguay. La neutralización del proyecto del MERCOSUR dejaría en pie el modelo alternativo, de tratados de libre comercio bilaterales con Estados Unidos o la Unión Europea, que significan la liquidación de los actuales proyectos de soberanía económica y de industrialización autónoma latinoamericana. Estos factores externos, permiten entender el conjunto de intereses que apuestan a la derrota del actual proyecto argentino, y porqué ciertas fracciones económicas locales son los actores mediante los cuales la estructura del sistema mundial puede reconducir a la Argentina al redil de la “globalización”.